



Revista de Fomento Social, 53 (1998), 111-117

Manifiesto público sobre lo público

Desde la crítica al que se ha denominado «pensamiento único», pero sin dejar por ello de reconocer la deficiente administración pública que de lo público se ha producido en los últimos lustros, el autor apuesta claramente por lo público y la gestión pública frente a la ola de privatizaciones que nos invade. Entiende que esta opción significa una apuesta por la democracia, ya que la toma de partido por lo público cuenta con dos referentes legitimadores indudables: la gestión de los asuntos comunes de la sociedad política se realiza en público y de forma más transparente, y dicha gestión de los asuntos comunes se determina por el público y para el público.

— Nicolás María LÓPEZ CALERA (*) —

(*) Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada.

Las privatizaciones: el negocio como solución

Hace ya algunos años, quizá demasiados, el semanario norteamericano «Time» ilustraba su portada con un titular que decía: «los gobiernos en todos los sitios liquidan sus activos». La privatización económica de los servicios públicos y de las empresas estatales es una política ya vieja pero todavía vigente. En nuestro país el gobierno socialista, de la mano de Boyer y Solchaga, dejó poco que privatizar al gobierno conservador de Aznar. Y lo poco que queda medianamente importante lo privatizan los alcaldes. De Emasagra a Riad; el agua, necesidad básica y bien público, se convierte en objeto de negocio privado y los asuntos públicos se negocian en los viajes privados. Todo un espectáculo.

Nos guste o no nos guste a algunos, éstos son los signos de nuestro tiempo:

Uno: «Carlos Marx ha muerto. Viva Adam Smith».

Dos: «Más mercado y menos Estado».

Pero no todo es economía. En los últimos años se ha producido también una privatización ideológica. Marshall Berman publicaba a finales de los 80 un libro titulado *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, donde se criticaba el abandono de lo público. Un álbum del Bob Dylan de estos años resumía la situación: «Bringing it all back home», de vuelta a casa con todo. Las gentes han abandonado las calles para protestar. Todos se vuelven descreídos sobre utopías y grandes relatos. Ya quedan pocos cristianos de verdad y casi ningún marxista con fe viva. Estamos secuestrados por lo que se ha llamado «el pensamiento único», un pensamiento que prohíbe ser utópico y que impide ser rebelde, un pensamiento que sirve a las fuerzas económicas dominantes, que colabora a que todo pueda seguir marchando en la dirección correcta. Y lo correcto es encerrarse en casa y dejar a los políticos que se ensucien las manos con las cosas públicas.

Esta situación social de enemistad con lo público y de exaltación de lo privado (de la iniciativa privada) estaba ya promovida y justificada en el famoso informe de la Trilateral que editó M. Croizier con el título *La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias a la Comisión Trilateral* de 1975, donde se hablaba de la «ingobernabilidad democrática» y de las perversas consecuencias de los avances de una democracia económica para las conveniencias del gran capital. Los grupos económicos y políticos más conservadores y reaccionarios vienen trabajando, desde entonces, en justificar

una privatización generalizada de sectores sociales, sobre todo económicos, que estaban siendo regidos por un Estado democrático y social.

Pero también debe añadirse de inmediato que esta situación social, dominada por tanto amor a lo privado o transida de privatizaciones de toda clase, se ha producido con la colaboración (o traición) de sectores sociales de izquierdas que han tenido altas responsabilidades de gobierno y que abandonaron el viejo proyecto marxista de una «ilustración radicalizada». Muchos de los ideólogos del 68, los hijos de Marx y de la coca-cola («the children of Marx and coca-cola») han sido con desgraciada frecuencia eficaces colaboradores de esas políticas conservadoras de privatización y, sobre todo, en nuestro país, han contribuido con su impericia y su corrupción a que lo público sea puesto al pie de los caballos.

En cualquier caso no podemos ignorar cuál ha sido el verdadero motor de esta privatización creciente. Los amos del mundo siguen siendo los mismos, aunque ahora ya no tienen rostro. No se puede olvidar que estamos dominados por una economía invisible. Todo sucede porque se impone su lógica, su «razón», una razón que no se contrasta con ninguna y que odia la democracia. La única lógica o la única razón que rige es la lógica de la producción y del beneficio del capital privado. La eficiencia y la rentabilidad son los valores supremos que determinan las políticas económicas y sociales. Los valores que determinan también cómo ha de funcionar un canal de televisión y cómo ha de hacerse un periódico. Lo público no sirve porque inunda las economías de ineficacias, de falta de productividad y rentabilidad. Pero lo dramático es que esas políticas privatizadoras son un buen negocio que no entiende de justicia distributiva. Y como a todos nos va bien, al menos a los que habitamos esta parte del mundo, callamos, consentimos e incluso se nos impone el deber de aplaudir para que no nos llamen hipócritas.

Pero ¿pueden cambiar las cosas a mejor con tanto servicio público ineficaz y tanta empresa pública deficitaria? No lo sé. Pero, y con tanta privatización ¿irán las cosas mejor? Alguien puede decir que peor no pueden ir. Bueno, es una tesis que necesita verificación pero en cualquier caso habría que preguntarse, si las cosas mejoran, ¿para quién mejoran?

Hay una tesis muy repetida desde casi tiempo inmemorial: la gestión privada de los intereses públicos suele ser más eficiente y consecuentemente más rentable, que la gestión pública de lo público. Pero no se trata sólo de un problema

de rentabilidad y de eficiencia, sino de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Y cuando se trata de «necesidades básicas», los criterios de la eficiencia y la rentabilidad no pueden ser los únicos para organizar esos servicios. La salud, la seguridad social, la educación, el trabajo, los transportes, las minorías más desfavorecidas (niños, mayores, discapacitados, etc.) no son mercancías o materias primas. En mi opinión, hay un dato que la experiencia social puede confirmar: los problemas públicos (del público) que afectan a necesidades básicas y a grandes masas de población jamás podrán tener soluciones privadas, esto es, soluciones basadas en la iniciativa privada y en un cálculo económico cuyos parámetros definitorios son la eficiencia y la rentabilidad. Los problemas públicos no pueden ser, o no deben ser nunca, objeto de un negocio privado.

La apuesta por lo público: apuesta por la democracia

Comprendo que esa ola de privatizaciones no es un intento producido por el egoísmo de un capitalismo feroz, sino que es también consecuencia de una mala o deficiente administración pública de lo público. Las empresas de mensajería (Correos), las compañías de seguridad privada (policía), los fondos de pensiones (seguridad social), los seguros privados de enfermedad y accidentes (servicios públicos de salud), etc., no han surgido por arte de magia, sino después de que las cartas dentro de una ciudad tarden en llegar tres días, después de que en las comisarías de policía te miren con ojos de escepticismo cuando haces una denuncia por robo, después de esperar horas en una consulta o meses para ser operado, etc. La mala gestión de lo público ha sido uno de los más graves atentados contra el Estado social del Derecho, contra el Estado de Bienestar o el mejor colaborador de esas políticas conservadoras y privatizadoras. Pero ¿por qué se gestiona mal el sector público? En mi opinión hay dos razones de fondo que explican por qué no funciona lo público.

La primera es que el Estado, al ser cada vez más democrático y habiendo apostado más por la igualdad real, recibe más demandas sociales y no responde, o no puede responder, a tantas demandas. Es el Estado *sobrecargado*, un Estado que no puede servir a *todo* y a *todos*. La gente quiere que la sanidad pública cuide a fondo de sus dientes y no sólo que le saquen los que se le están cayendo. No hay dinero en un país para establecer unos servicios de odontología

que respondan a esas expectativas. No cabe imaginar un servicio público de odontología dedicado a endodoncia o a *implantes*. El *medicamentazo* es una prueba, sin duda discutible, de que ha habido que restringir los fármacos que no sirven de una manera muy *directa* a sanar, porque no hay dinero para todo y para todos. Así, pues, los servicios públicos no funcionan porque están sobrecargados y no hay dinero para hacerlos más eficientes y más amplios.

El problema de fondo quizá sea lo que se ha llamado la *crisis fiscal del Estado*, un Estado que recauda menos de lo que tiene que gastar. Parece razonable pensar que el problema se resolvería aumentando los ingresos estatales, los impuestos. De esta manera habría dinero para mejorar, aumentar o ampliar los servicios públicos. Pero seamos realistas: las gentes no quieren pagar más impuestos, la gente que puede no está dispuesta a soportar más cargas fiscales, más aún cuando se ven envueltas por un círculo vicioso y maldito de difícil superación: no se pueden mejorar los servicios porque no hay financiación, y no hay financiación porque la sociedad no está dispuesta a dar más dinero para unos servicios que no funcionan. Entonces el Estado se lava las manos y sentencia: arréglenlas como puedan. Paguen lo que quieran o lo que puedan a servicios privados, exijan lo que quieran o lo que puedan y a mí déjenme en paz. Me dedicaré a volver a mi viejo papel de Estado liberal, esto es, a ser guardián del orden público y de unas mínimas reglas de ordenación social y económica.

Pero los defensores de lo público deben ser autocríticos y reconocer que la segunda gran razón de esta ola de privatizaciones es que lo público no ha funcionado ni funciona por causa de una mala gestión, por graves irresponsabilidades de los administradores públicos (funcionarios y políticos). Lo público no ha funcionado, en definitiva, por la falta de una ética pública, una ética que exige competencia y responsabilidad más allá de las exigencias legales. El mundo de lo privado siempre tiene la motivación del propio interés por hacer las cosas bien, por actualizar conocimientos y medios. Pero en el ámbito de lo público falta la convicción ética de tomar lo público como privado y eso hace verdaderos estragos. No duele lo público y por ello hay un mal uso de lo público. Por ejemplo, la austeridad pública no existe. La austeridad ha quedado reducida a un cálculo económico de interés privado o, a lo más a una virtud religiosa, por otra parte bastante trasnochada. Para lo público no hay austeridad. Nadie repara en aprovechar bien el papel en un centro público. O no importa gastarse cantidades multimillonarias en palacios de congresos o en teatros reales sin priorizar los

necesidades y los gastos, cuando ningún privado se compraría un automóvil de lujo y por ello dejaría a sus hijos sin atención médica. Pues eso sucede en la vida pública. La legalidad no basta para que las cosas funcionen. Eso lo saben bien los ideólogos del capitalismo. Por eso priorizan los *incentivos económicos* y hasta últimamente defienden la ética como valor empresarial contable.

El funcionario *público* no puede olvidar que trabaja para el *público* y el público es el pueblo. Sirve, pues, a intereses mucho más importantes que a un mero interés individual o privado. La inmoralidad privada daña a uno o a unos pocos. La inmoralidad pública, que es sobre todo falta de responsabilidad y de competencia, causa daños a muchas gentes. No abrir una tienda a las nueve de la mañana causa daños a una familia y el que quiera comprar puede irse a otra. Cuando un servicio público no se abre o no funciona se causa daños a un grupo social amplio, se daña la imagen de todo un sistema y además no hay posibilidad de ir a otro servicio, salvo que sea privado y pagando.

Debe admitirse que todos los vientos son favorables a la hegemonía de lo privado. Ya hay hasta cárceles privadas para que el Estado no tenga que hacerlas ni mantenerlas. Las cosas están así y van a seguir estando así, si la lógica de la realidad no empieza a mostrar las contradicciones de tamaño desatino social. No podemos olvidar que estamos en un mundo de escasez, donde no todas las necesidades básicas pueden ser satisfechas desde la iniciativa privada, porque entre otras cosas no todos parten de iguales condiciones económicas y culturales a la hora de satisfacerlas. Hace falta eficiencia, pero también y sobre todo justicia social. La *mano invisible* del viejo liberalismo económico no tiene respuestas para alcanzar un orden económico justo. Para seguir creyendo en esa *mano invisible* hace falta tener mucha fe liberal, cuando la historia social y económica promueve más bien un ateísmo fuerte en relación con los milagros que pueden producir el individualismo y la iniciativa privada.

La apuesta por lo público es, en definitiva, una apuesta por la democracia. Porque la apuesta por lo público tiene estos dos referentes legitimadores:

- 1º. Que la gestión de los asuntos comunes de una sociedad política se va a desarrollar en público, esto es, con luz y taquígrafos. Esto es lo que, entre otras cosas, diferencia a un Parlamento de un consejo de administración de una sociedad anónima.
- 2º. Que la gestión de los asuntos comunes ha de estar determinada *por el público y para el público*. En este sentido la gestión pública es sinónimo de gestión democrática.

Los neoliberales saben perfectamente que no pueden prescindir del Estado. La solución no es privatizar todo bajo el supuesto de que todo funcionará así mejor, sino *refundar* moral y políticamente el Estado democrático, un nuevo Estado en el que la ciudadanía pueda creer. Los retos sociales del siglo XXI no están en maximizar la eficiencia del sistema social, que sin duda es un problema, sino en maximizar la justicia de sus instituciones públicas y privadas. Que 1.300 millones de personas vivan en la miseria absoluta no es un problema de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, sino un problema de justicia social.

El gran reto del siglo XXI no es, pues, de estricta naturaleza política, sino de justicia económica: es la construcción de un nuevo orden económico internacional y, si se quiere, de una democracia económica. La democracia política se empezó a conquistar a partir de 1789 y ha logrado altos niveles de desarrollo, al menos en el mundo occidental. La democracia económica está todavía por inventarse, por exigirse y sobre todo por realizarse. Privatizar puede que hasta sea una buena solución en un mundo desarrollado, aunque lo dudo. Pero desde luego a nivel global, a nivel mundial, a nivel cosmopolita, no hay solución a los males sociales (el mal de la pobreza absoluta) con medidas privatizadoras. O hacemos que el interés público, el *interés del público*, esto es, el interés de la mayoría domine la lógica de la economía o nos vamos a acordar con nostalgia del muro de Berlín. Las pateras son el anuncio patético de un drama mundial con dos finales igualmente infelices: la invasión de los territorios de los ricos por masas de pobres desarmados, o el exterminio de esas masas invasoras. La privatización es una broma de mal gusto dentro de un drama mundial de dimensiones globales.